NOTAS

1793: AÑO II DE LA IGUALDAD

*Carlos Escobar**

En el prólogo de su obra *La gran Revolución*, Pedro Kropotkin, el príncipe anarquista ruso, afirma que la Revolución Francesa fue producto de dos grandes corrientes: La de las ideas, representada por el Tercer Estado —esto es, la burguesía— y la de la acción, encarnada por las masas plebeyas.

Ciertamente que en las ideas de la ilustración francesa y del constitucionalismo inglés y norteamericano, se halla la base teórica —llamémosle así— con la que el Tercer Estado cuestionó la estructura de jerarquías privilegiadas en que se asentaba el estado absolutista consolidado por Luis XIV durante el siglo XVII. Sin embargo, las multitudes que lo derrumbaron en el año 1792, no sólo tuvieron el arrojo y la determinación para hacerlo, sino también ideas —muy claras en ciertos momentos— acerca de la sociedad y el gobierno que querían para reemplazar el antiguo régimen.

A principios de 1789, la curva de los precios estaba por alcanzar el nivel más alto del siglo XVIII. Los cereales aumentaban hasta en un 165% y la agitación ascendía al ritmo de la inflación, mientras el estado afrontaba una grave bancarrota económica y una crisis ministerial.

En tan ominoso contexto, Luis XVI convocó a la reunión de ese parlamento medieval corporativo, denominado “estados generales”. La burguesía, inquieta ya por las ideas de igualdad constitucional, acudió a la asamblea esperanzada en obtener ciertas reformas —fundamentalmente fiscales— para reducir los desniveles que la colocaban en un grado de absoluta inferioridad ante los otros dos estados: la nobleza y el clero.

Pero aquel estado era irreformable. Su rigidez no era sino la inflexibilidad de la nobleza, que no admitía la más mínima concesión en merma de sus privilegios —realmente no pagaba impuestos—, cuya defensa a ultranza cerró toda posibilidad de arribar a un compromiso como el que en Inglate-

77

* Estudiante ITAM.

NOTAS

rra sellaron los "landlords" y la burguesía para repartirse el poder y el gobierno.

Entre el Tercer Estado, la palabra **igualdad** comenzó a pronunciarse con acentos un tanto radicales, pero en voz baja. Hasta ahí, aquello era todavía un pleito parlamentario; la fuerza capaz de desempantanarlo no se hallaba en el palacio de Versalles, donde sesionaba la asamblea. El pueblo de París, que se había ilusionado demasiado con esa asamblea esperando de ella medidas contra la crisis económica que jamás se tomaron, perdió la paciencia y con el primer pretexto se sublevó. La palabra que en Versalles a nadie se le ocurrió pronunciar, ni siquiera en voz baja, muy pronto sonaría en todo París: **Revolución**.

Los acontecimientos franceses de 1789 se produjeron en un contexto mundial marcado por las revoluciones, inglesa de 1640-60 e independentista norteamericana de 1776. Las ideas democrático-republicanas de un John Locke o las contenidas en la declaración de derechos del pueblo de Virginia, surgidas del Tercer Estado, ejercieron una fuerte influencia entre los futuros dirigentes revolucionarios. Sin embargo, tocaría a la Revolución Francesa, superando igualmente la herencia de aquéllas, operar el giro histórico hacia una nueva era, que hasta hace poco se llamaba modernidad. La explicación debe buscarse abajo, no arriba.

Alexis de Tocqueville se preguntó: "Por qué unos principios análogos y unas teorías políticas parecidas llevaron a los Estados Unidos sólo a un

cambio de gobierno y a la Francia a una subversión total de la sociedad." Esto nos remite a cierta especificidad francesa, que encaminó a la revolución por rumbos inéditos.

A los cambios fundamentales que se produjeron principalmente en Francia, Inglaterra y los Estados Unidos entre los siglos XVII y XVIII, se les ha clasificado genéricamente como revoluciones burguesas, siendo considerada hasta hoy como el modelo clásico la francesa, que fue la más completa de todas. Se trata sin embargo, de una apreciación sumamente academicista que si en términos generales de esquema es aceptable, concretamente resulta falsa: La Revolución Francesa no es el modelo clásico de la revoluciones burguesas; sino por el contrario, una notable excepción entre todas ellas.

Lo que la distingue, individualizándola de manera inconfundible, no es su ideario en sí mismo, sino la fuerza de multitudes en que éste logra encarnar, y el radical contenido social con que se le asimila. El peso descomunal alcanzado por las masas populares incidió decisivamente, como en ningún otro lugar, en el curso de la revolución. Esto plantea una diferencia de cantidad y calidad con respecto a Inglaterra y los Estados Unidos.

En la Revolución Inglesa, los problemas de reforma social ocuparon un lugar marginal, o sencillamente se les ignoró. Los independientes de Cromwell o los puritanos, jamás se cuestionaron seriamente el grave proceso de pauperización campesina iniciado el siglo XVI, por el despojo a manos de

NOTAS

los lores, cercando campos para el ganado lanar. Desde ese tiempo y hasta la época victoriana, en una larga tradición compartida hasta por el socialismo fabiano, la mitigación de la pobreza se concibió como un mero asunto de caridad pública. Los *levellers* (igualitarios) y los *digger* (excavadores) —ala plebeya radical de la revolución que realmente intentaron solucionar el problema social— fueron fácilmente derrotados sin que jamás lograran, ni lejanamente, una influencia comparable a la de sus similares franceses, los *enragés* (rabiosos).

En los Estados Unidos nadie se agitó por problemas de este carácter. Los padres fundadores de la nueva nación consideraron la esclavitud, por ejemplo, como algo normal derivado de leyes divinas. Se actuaba sobre valores entendidos: la sociedad debía seguir siendo tal y como era. La independencia se hizo para afianzarla, no para cambiarla.

Para el desarrollo histórico de Occidente, la revolución francesa representó un giro tan decisivo, como en su momento lo fue el fenómeno renacentista. Al conciliar los valores morales del cristianismo con las concepciones de la vida profesadas por la antigüedad pagana grecolatina, el renacimiento concibió una nueva relación del hombre con el pensamiento, la vida cotidiana y el mundo, de influencia tal, que habría de definir el ideal de la civilización occidental.

En el orden de la política, ocurrió algo similar con la revolución francesa: Estableció una nueva concepción

del ciudadano y el estado —que también significa una nueva relación entre ambos— porque se pensó en términos de universalidad —la revolución formuló los derechos universales del hombre; no los del hombre francés— y a diferencia de Inglaterra y los Estados Unidos, no les buscó fuente de legitimación en la Biblia, sino en “los derechos intemporales de la naturaleza y la razón”, inspiradores de la democracia ateniense y la República romana. Francia pasó a convertirse así, en el modelo burgués de estado y política occidentales.

Sin embargo, tras estos giros históricos e ideas que los encauzaron, latía la vida real, alejada de esquemas mecanicistas y llena de paradojas. Maquiavelo fue un producto tan renacentista como Tomás Moro; *El Príncipe* y *Utopía*, expresan dos ideales de estado y sociedad, completamente opuestos, pero pensados por la misma cultura.

Del mismo modo, la revolución de 1789 se perfiló tanto en el modelo de un estado representativo centralizado, como en la idea de democracia federativa practicada desde abajo, excluyentes entre sí.

Libertad, igualdad y fraternidad eran, en el lenguaje político de la época, las tres diosas que guiaban al pueblo; pero ese pueblo no las entendía de la misma manera que los caudillos de la Gironda y el partido jacobino. La monarquía se derrumbó definitivamente bajo el golpe de la insurrección popular de agosto de 1792; sólo hasta entonces se habló de República. Pero en tanto Robespierre se la representaba

NOTAS

como un conjunto de instituciones sometidas a una rigurosa centralización — culminación en tal sentido de la obra política absolutista iniciada por Luis XIV — los descamisados de los arrabales parisinos la concebían como una especie de instancia superior de coordinación federada, expresión de las asambleas seccionales, sociedades patrióticas y comités revolucionarios donde todo se decidía mediante la participación y el voto directos. En primerísimo lugar el nombramiento o destitución de representantes — llamados voceros — según la voluntad de las mayorías.

Esta gente no negaba la necesidad de un poder organizado; lo que a sus ojos carecía de legitimidad, era la existencia de instancias de mediación entre ese poder y los organismos populares que constituían el nervio vital de la revolución. Esta actitud tenía su fuente en la firme convicción de que todo el poder emana del pueblo. La diferencia está en que los descamisados creían absolutamente en ella y obraban en consecuencia, dando lugar a un proceso de autoorganización social, principio que realmente guiaba toda su acción.

De esta concepción plebeya sobre la democracia derivó algo aún más importante: para los jacobinos y girondinos la igualdad que había emergido victoriosa de las ruinas de la monarquía era la igualdad civil; para los descamisados que percibieron lúcidamente la caída del antiguo régimen como obra suya, el fin de la monarquía significó algo más que un gran cambio político,

creyendo llegada la hora de instituir la igualdad de fortunas.

En el fondo, la historia de la Revolución Francesa, hasta su muerte, es la historia de la disputa entre dos concepciones sobre los fines y las tareas de la revolución.

Hace exactamente dos siglos la diosa igualdad descendió sobre Francia y posó su pie en París. Durante un breve período la fórmula del poder emanado del pueblo se tornó en realidad. A la fracción jacobina, elevada a hombros de la insurrección popular, jamás se le escaparon los hilos del poder; sin embargo, la presión de las multitudes populares la llevaron mucho más allá de donde habría querido llegar, esto es, hasta la ejecución de medidas políticas y sociales que contradecían su propio programa, enajenándole el respaldo de la burguesía.

Las masas plebeyas se acercaron al cielo, pero cayeron víctimas de sus propias contradicciones y de un equívoco en el tiempo; quisieron fundar una República llamada Utopía.

Así, hace 200 años, los dirigentes oficiales de la revolución francesa, de Lafayette a Robespierre, crearon un gran mito: ya no habría clases sociales, sólo ciudadanos. Llamar a las cosas por su nombre es diferenciar, y toda la batalla ideológica de aquéllos estuvo encaminada a evitar que se asumiera la existencia de ciudadanos de primera y segunda; unos elegibles y otros no; unos que se enriquecían con la especulación y otros que permanecían por horas ante las puertas de las panaderías. En esas circunstancias, el lenguaje

NOTAS

político estaba hecho de abstracciones puras, y “democracia” era una más.

Sin embargo, para la plebe revolucionaria la democracia tenía nombre y padres reconocidos. Entendió por propia experiencia que aquella, para ser real y efectiva, requería de cosas muy concretas, y la primera era el derecho a vivir con dignidad, para lo cual era necesario hablar de pan, salario y trabajo. Éstos eran terrenos donde el ciudadano abandonaba el reino de la abstracción, para ser ubicado según los rangos de la fortuna.

El rey ha muerto, muera el rey

En el París prerrevolucionario del siglo XVIII, la indumentaria era lo que expresaba del modo más inmediato las abismales diferencias de nacimiento que dividían a la sociedad del antiguo régimen. Al habitante de los arrabales que llevaba pantalón corriente, se le llamaba *sans culott*, por oposición al noble que usaba pantaloncillo estrecho de seda, o *culott dorée*.

Como tantas veces ha acontecido en la historia, un epíteto denigrante puede perder su acento despectivo, para transformarse en un signo de identidad que se lleva con orgullo, y eso sucedió al estallar la revolución. Con el término *sans culott* se conoció al revolucionario, enemigo de la nobleza — suma de virtudes republicanas más tarde — que hasta ciertos dirigentes e intelectuales del Tercer Estado gustaban de aplicarse. Los originales destinatarios de ese nombre, los ple-

beyos que vivían de su trabajo personal o sus pequeños negocios, odiaban profundamente a la nobleza, pero adoraban sinceramente al rey. Una larguísima tradición — verdadero mito popular — les hacía ver al rey como un padre bondadoso, pero rodeado de una turba de nobles y clérigos egoístas, enemigos del pueblo, quienes le ocultaban el sufrimiento de los pobres, a los que amaba y prefería. En este arraigadísimo mito de cuño medieval, está la explicación parcial de las inmensas ilusiones que se apoderaron de los *sans culott*, al conocerse la convocatoria a la reunión de estados generales. El hambre y la carestía apretaron, y los *sans culott* creyeron que el buen rey y los diputados burgueses que los representaban (sólo los propietarios con cierta renta podían ser electos), les darían soluciones efectivas.

No se piense, sin embargo, que esa imagen del rey justiciero que prefería al pueblo sobre la nobleza era cosa únicamente de ingenuos analfabetas. En vísperas de la inauguración de la asamblea de estados generales, circuló en París un volante anónimo concebido por mentes ilustradas y dirigido a un público esencialmente burgués:

“¡Frívolos parisienses! vais al teatro, a los cafés, a los juegos, mientras la monarquía se encuentra en peligro, mientras vuestros enemigos se empeñan en hacer más pesadas vuestras cadenas y en reduciros a la esclavitud. Cobardes, venced vuestra vil apatía que se vuelve criminal. Levantaos contra el clero, la nobleza y los jueces que

NOTAS

se han confabulado en contra de vosotros, no toleréis que 600.000 personas impongan la ley a 24 millones.... ¡Agrupaos en torno al rey!, ¡formad un muro en torno a él!, ¡sustentad su autoridad y la independencia de su corona! ¡Franceses, no os dejéis engañar por las resoluciones del parlamento!”

En Versalles la causa que los *sans culotts* juzgaban suya se encontraba atrapada: los diputados del Tercer Estado pidieron que se votara por cabeza y no por corporación, pero el rey se negó. Se reunieron entonces separadamente y se proclamaron asamblea nacional, jurando no disolverse hasta lograr una constitución. Semejante insolencia no merecía más que un golpe de estado, y el rey se decidió a organizarlo.

82

El 14 de julio, el pueblo se adelantó asestando su propio golpe. El asalto a la Bastilla fue casi un acto simbólico, dirigido contra la más evidente y odiada expresión del antiguo régimen: la nobleza, pero no contra el rey. Saint Just, testigo de esa jornada, narró en cierto discurso, cómo la multitud descuartizaba los cuerpos de los defensores de la Bastilla gritando: ¡Viva la libertad!, ¡Viva el rey y el Señor de Orleans! (también de linaje real). En el imaginario popular la figura real aparecía intemporal, situada por encima de toda la sociedad y amiga del pueblo, en contraposición de la nobleza, ilegítima y usurpadora de los derechos del rey. Para las masas asaltantes de aquella fortaleza, este acto significó algo así como un deber de fidelidad hacia su monarca, para librarlo de la

conspiración nobiliaria, de modo que pudiera ejercer justicia hacia las víctimas del hambre.

Esta mentalidad — que hoy parecería contradictoria — es típica de las sociedades que algunos historiadores llaman preindustriales, y no fue un caso exclusivamente francés.

En 1793, cuando el pueblo vienés se enteró de la ejecución de Luis XVI, se amotinó, pero dirigió su furia contra los nobles franceses emigrados. El lumpenproletariado de Nápoles, los *lazzaroni* — “la muchedumbre del rey y la iglesia” — fieles borbonistas y fanáticos antijacobinos, pensaban todavía en 1799, que los nobles habían traicionado al rey, por eso saqueaban sus mansiones y la emprendían a pedradas contra los carruajes lujosos.

El lapso que corre entre la toma de la Bastilla y la jornada insurreccional de agosto del 92, que derrumba a la monarquía, es un interregno colmado de indefiniciones. Se proclaman aboliciones — como la de los privilegios feudales — pero no se cumplen. La nobleza y la mayoría popular encabezada por la burguesía miden fuerzas; sin embargo, la balanza no se inclina hacia ninguno de los bandos. Francia entera gravita en el vacío, entre dos poderes efectivos que se anulan entre sí. Uno que todavía no muere y otro que no acaba de nacer.

Luis XVI es aún el rey de los franceses y por lo tanto, el rey de los *sans culott*. Ahora que bajo las proclamas y los discursos políticos comienza a asomar la contienda social, éstos lo quedarán de su lado.

NOTAS

En el principio fueron las mujeres. En octubre del 89, irritadas por el hambre y la carestía, acuerdan trasladarse en masa de París a Versalles para quejarse ante el rey. Desplegando una actitud más resuelta que la de los hombres, fuerzan su entrada al palacio; ni la guardia real logra detenerlas. Allí deciden que lo mejor es llevarse al rey a París, cerca del pueblo y lejos de los nobles. Al constatar la firme determinación de esas bravas mujeres, Luis comprende que su invitación no puede despreciarse. El símbolo de Francia y su pueblo, es virtualmente secuestrado al grito de ¡Viva el rey!

En 1792, los *sans culott* pondrán a prueba por última ocasión sus mitos y sus ilusiones en el rey, poniendo a prueba al propio rey. El 10 de junio invaden el palacio de las Tullerías, para pedirle que no ejerza su derecho de veto — que la asamblea nacional no fue capaz de quitarle — contra las iniciativas de los diputados populares. Como si aún quisieran convencerse de que Luis es el rey del pueblo francés, lo invisten con los símbolos de la revolución: le coronan su real cabeza con el gorro frigio de la libertad y la escarapela tricolor y beben un vaso de vino con él. El buen Luis departe alegremente con la plebe; si bien no contesta nada en concreto a sus peticiones.

Pero existe ya un cambio fundamental: el gran temor se extiende. Los *sans culott* saben que se trama un golpe contrarrevolucionario y los nobles gestionan la intervención extranjera, por eso irrumpen en las Tullerías ar-

mados y de manera violenta. Seguramente en esos momentos aún no son conscientes de que con su acción — no tan espontánea como se piensa — han comenzado a romper aquel frágil equilibrio entre los dos poderes que ya mencionamos.

El punto de ruptura irreversible se produce con la huida de Luis XVI de París y su inmediata captura en Varennes. El ciclo se completa; el mito se derrumba para siempre; Luis aparece ante las masas como la cabeza de la conspiración contrarrevolucionaria.

Para aquilatar de manera exacta la extraordinaria dimensión de este giro, hay que comparar el texto de aquel volante anónimo que citábamos, con un cartel, también anónimo, pero de indudable mano popular, que Desmoulins relató haber visto fijado en el palacio de las Tullerías:

“Se da aviso a los ciudadanos que un cerdo gordo se escapó de las Tullerías; se ruega a quienes lo encuentren, devolverlo a su madriguera; obtendrán una módica recompensa.”

El rumbo radical tomado por la revolución tras la fuga del rey y su posterior ejecución, fue la expresión inmediata de un violento cambio que se operó en las ideas de esos miles de hombres y mujeres del pueblo, que en apenas unos cuantos meses, se deshicieron de viejas concepciones sobre la legitimidad, la justicia, el estado, el poder, y aún la nación en cierta forma, arraigadas por una tradición de siglos. ¿Quien representaría ahora al pueblo francés y su voluntad?

NOTAS

Luis XIV, el rey sol, había dicho: El estado soy yo. Ahora, con la misma naturalidad, el Tercer Estado podía decir: La nación soy yo.

La idea no era nueva, el término nación había aparecido ya desde el siglo de Luis XIV. El absolutismo lo adoptó infundiéndole, en razón de su propia naturaleza, un contenido burocrático de centralización político-administrativa. El pensamiento de las luces le heredó a la burguesía otra idea de nación que, sin embargo, en la práctica de una interpretación puramente legal y estatal, no se apartaba sustancialmente de la forma que le dio el absolutismo. “La nación, la ley, el rey” fue la divisa de la asamblea constituyente, sucesora de la asamblea nacional.

Pese a todo, la burguesía introdujo un elemento nuevo en la definición nacional, que para la monarquía resultó completamente ajeno y, además, antagónico: la mayoría.

Los números no mienten, por eso legitiman al que sabe usarlos. Emmanuel Sieyes le dio a la burguesía un verdadero programa a través de su famoso folleto “¿Qué es el Tercer Estado?”, escrito para fijar una posición de clase en la asamblea de los estados generales. Ahí, el abate afirma lo siguiente:

“Yo pido que se preste atención a la diferencia enorme que existe entre la asamblea del Tercer Estado y la de las otras dos clases (nobleza y clero), la primera representa veinticinco millones de hombres y delibera sobre los intereses de la nación. Las otras no reciben poderes más que de unos

200.000 individuos, y no tienen más preocupación que sus privilegios. El Tercer Estado — se nos dirá — no puede por sí solo formar los estados generales. ¡Tanto mejor! responderemos; así se compondrá una asamblea nacional.”

Al transformar la cantidad en calidad, Sieyes define a la nación y, al mismo tiempo, su expresión estatal, porque representa a una clase de hombres que piensan todo — reformas y revoluciones — en términos de estado y leyes. Esto no es fortuito. La mayoría de los diputados del Tercer Estado se habían formado en la misma escuela: eran gente que trabajaba o había pasado por la burocracia administrativa del aparato absolutista. “Es preciso entender por Tercer Estado — remacha Sieyes — el conjunto de ciudadanos que pertenecen a la clase común. Todo lo que es privilegiado por ley, de cualquier manera que sea, sale de la clase común, hace excepción a la ley común, y por consecuencia, no pertenece al Tercer Estado. Ya lo hemos dicho: una ley común y una representación; he aquí lo que forma una nación.”

Si las mayorías — la clase común no privilegiada — son la nación, esto debía derivar — técnicamente — en un estado nacional administrado y dirigido por esas mayorías; eso que llamamos democracia. En realidad no era así. La burguesía, contradiciendo con actos sus enunciados de fe popular, soltaba palabras gloriosas, pero flotando en la abstracción y plagadas de ambigüedades. Los diputados nacionales, como se les llamaba, sólo eran elegibles entre los que tenían una ren-

NOTAS

ta; sólo éstos podían formar la guardia nacional. Los africanos de las colonias antillanas, esclavos o libertos, ni siquiera fueron reconocidos como ciudadanos. En la realidad, las cosas funcionaban exactamente a la inversa de como las formuló Sieyes: el privilegio de tener renta y propiedades, no el de pertenecer a la mayoría, era lo único que permitía ser representante de la nación y entrar a las filas de sus defensores. La nación francesa anterior a la proclamación de la república, no fue más que una nación consensual de minorías burguesas.

Las cabezas pensantes del Tercer Estado estaban peleadas con el espíritu corporativo medieval del absolutismo, no contra su doctrina estatal centralizadora. De ahí que, en lo sucesivo, todo lo que tendiera a desentonar con el unitarismo estatal de la nación según la concepción burguesa, debería ser colocado bajo sospecha.

La Francia de aquella época era un agregado de regiones dispares que poseía mucho menos unidad lingüística que, digamos, el virreinato español de la Nueva Granada en América. Sin embargo, cultura y nación fueron en Francia, desde tiempos tempranos, términos relativamente coincidentes. La diversidad, en todo caso, jamás originó verdaderos enfrentamientos étnicos, como en otras partes de Europa, pero esto no significa que el trato hacia lo diferente fuese tolerante.

La lengua francesa se volvió símbolo patriótico nacional, sencillamente porque sirvió de vehículo a una revolución que la burguesía pugnaba por

centralizar en sus manos, alejándola del federalismo. Se ha hecho célebre aquella proclama de los años de guerra que afirma: "El federalismo y la superstición hablan bajo bretón; la emigración y el odio a la república, hablan alemán; la contrarrevolución habla italiano y el fanatismo habla vasco. Destruyamos estos instrumentos de fanatismo y error. Es mejor instruir que hacer traducir.... Debemos a los ciudadanos el instrumento del pensamiento público, el agente más seguro de la revolución, el mismo lenguaje."

Si bien es cierto que la reacción contrarrevolucionaria asumió un definido tinte regionalista con las sublevaciones de Bretaña y la de Vendee, en realidad, la burguesía introdujo una carga de violencia e intolerancia contra todo lo que percibió como diferente a sus voluntades por someter a la revolución a una unidad burocrática, proclamada desde arriba. Fue entonces natural que esas ideas de homogeneidad centralista se trasladaran al terreno de lo social. El espíritu corporativo, que dividía a los hombres de manera artificial, era el del antiguo régimen; con su caída acabaron el fanatismo y el error, siendo sustituidas por el culto a la razón divinizada.

La igualdad civil parió al ciudadano, ente abstracto al que las leyes de la naturaleza — por fuera del texto legal — otorgaron un nuevo derecho a la desigualdad de acuerdo al frío cálculo de fortunas. La burguesía encontró que estas diferencias estaban en el orden natural, y las asumió explícitamente. Pero jamás aceptaría que esas

NOTAS

diferencias fuesen reivindicadas en términos sociales para agruparse en defensa de intereses legítimos, como asalariados o pequeños productores. El Tercer Estado, por su formación ideológica, tenía que ver en ello un intento por reafirmar el abolido mundo de las corporaciones. La doctrina liberal, ferozmente individualista, sólo reconoce al ciudadano abstracto, no a sus expresiones sociales, étnicas o culturales.

Nada resume mejor estas concepciones totalitarias de la burguesía, que unos párrafos de la ley Le Chapelier, la primera ley antisindical francesa votada por la asamblea nacional en junio del 91.

“Muchas personas han buscado crear de nuevo las corporaciones exterminadas, formando asambleas de artes, oficios en los que se nombraron presidentes, secretarios, síndicos y otros cargos... Sin duda debe permitirse a todos los ciudadanos reunirse; pero no debe permitirse a los ciudadanos de ciertas profesiones reunirse por sus pretendidos intereses comunes. No hay más corporaciones en el estado; no hay más que el interés particular de cada individuo y el interés general.”

En adelante, reivindicar intereses comunes, sería como hablar vasco o bretón: error y fanatismo, enemigos de la sagrada unidad de la nación y los ciudadanos.

Se precisó de un acontecimiento clave como la fuga del rey — que concretó el miedo a la conspiración de los emigrados — para que la nación, aban-

donando la esfera de las disquisiciones legaloides, se hiciera carne y sangre en las mayorías plebeyas.

A fines de 1791, Luis XVI escribe en una carta confidencial que “en lugar de una guerra civil, ésta será una guerra exterior”. Luis sabe de qué habla. Poco tiempo después, las tropas prusianas aparecen en la frontera del Rhin con las bayonetas listas para restaurar al rey en su trono. Por toda Francia corre la alarma y se escucha una sola voz: ¡La patria está en peligro! En las provincias y en las secciones parisinas, la iniciativa popular, desbordando — que no desconociendo aún — a los poderes legales, organiza y arma voluntarios para la defensa nacional.

Los recuerdos amargos encienden el patriotismo plebeyo, dándole un contenido de conflicto de clase: si la reacción doméstica y la agresión extranjera lograsen la victoria, el retorno del antiguo régimen, con toda su cauda de abusos y derechos feudales, sería inevitable. Nadie lo inventa, es la misma realidad la que hace identificables nación y revolución con las conquistas sociales — pocas por cierto — logradas desde la toma de la Bastilla. H. Taine — que no es sospechoso de simpatías plebeyas — resume puntualmente ese sentimiento que se apodera del pueblo francés. “Por propia experiencia saben la diferencia entre su condición reciente y su condición actual. Sólo tienen que recordarlo para volver a tener en la imaginación la enormidad de los impuestos reales, eclesiásticos y señoriales.” La mayoría

NOTAS

teórica se tornó real como multitud en armas; es ella la que finalmente nacionalizó a la nación.

La revolución posee una extraña cualidad que las cabezas del Tercer Estado han podido constatar: las ideas que brotan del discurso de sus ideólogos y tribunos, después de atravesar la marea revolucionaria, ya no parecen las mismas; como si tomaran significados distintos a su sentido original. Estos conceptos de nación y ciudadano, son donde la burguesía ha condensado esa vocación por el dominio absoluto de una minoría que quiere una revolución sin disidencias sociales y de límites, que corresponden exactamente con la garantía de sus intereses de clase.

Curiosa paradoja: será precisamente el tributo que la nación amenazada exige de todo ciudadano, donde habrán de expresarse de manera más abierta, los fuertes antagonismos que separan a los *sans culott* de los nuevos ricos de la revolución.

La burguesía se inquieta seriamente al advertir en el patriotismo radical de aquella plebe una posición muy similar a la adoptada por la diputación del Tercer Estado durante la asamblea de estados generales de 1789. Si aquella exigía igualdad fiscal con los otros dos estados para salvar de la bancarrota a la monarquía, ahora los *sans culott* exigen a los propietarios igualdad de sacrificios para salvar a la nación revolucionaria. Esta actitud se apoya en la aguda conciencia de las multitudes de ser ellas las que constituyen el soporte fundamental de la revolución, y a quienes la burguesía

debe los jugosos beneficios cosechados con la nacionalización de los bienes incautados a la nobleza emigrada. Lo mejor es oír esto de viva voz de sus protagonistas. En el número del 8 de junio de 1791 del *Ami de peuple*, el periódico de Marat, aparece una conmovedora carta firmada por los albañiles que construyen la iglesia de Santa Genoveva.

“Al amigo del pueblo:

Querido profeta, verdadero defensor de la clase de los indigentes, permitid que unos obreros os descubran las malversaciones y las torpezas que nuestros maestros albañiles (los que hoy llamaríamos contratistas) traman para sublevarnos y nos empujan a la desesperación.... Esos hombres viles que devoran en la ociosidad el fruto del sudor de los peones y que jamás han rendido servicio alguno a la nación, se habían ocultado en los subterráneos el 12, 13 y 14 de julio. Cuando vieron que la clase de los infortunados había hecho sola la revolución, salieron de sus madrigueras para tratarnos de bandidos,... mientras nuestros vampiros viven en palacios, beben los más delicados vinos, duermen sobre plumón, se desplazan en carrozas doradas y olvidan nuestras desgracias en la abundancia y los placeres, negando a menudo a la familia de un obrero muerto a medio día el salario de la jornada.

Acoged nuestras quejas querido amigo del pueblo y haced valer nuestras justas reclamaciones en estos momentos de desesperación en que

NOTAS

vemos desmentidas nuestras esperanzas, pues nos habíamos embelesado con la seguridad de participar en las ventajas del nuevo orden de cosas y ver suavizada nuestra suerte.”

A diferencia de lo que ocurrirá en el despertar nacional de otros pueblos europeos como el alemán o el polaco, el nacionalismo francés de la revolución, lejos de relegar a último término las diferencias sociales, las hace destacar en primer plano. Si la fidelidad a la patria se mide por la entrega y el sacrificio de los intereses particulares a favor de su causa, los hombres de fortuna beneficiados con la revolución no serán exactamente el modelo de desprendimiento generoso, sino los “ricos egoístas”, cuya lealtad será más que dudosa a los ojos de los *sans culott*, a quienes finalmente no les faltará razón.

88

Pero volvamos a la fecha crucial de junio de 1791. A tres años de la revolución, la burguesía, fundamentalmente su ala más moderada, aún se afana en encontrar una fórmula de compromiso que permita instalar una monarquía liberal constitucional. En sus planes no figura un rompimiento con aquélla, y menos aún su destrucción. Sin embargo, la conspiración de la facción intransigente de la nobleza, hostil a la contemporización, así como la fuga del rey y la extraordinaria agitación popular desencadenada, tornarán imposible cualquier acuerdo entre la revolución y el antiguo régimen.

Llevada por las circunstancias hacia un frente común con las masas radicalizadas, la burguesía abraza serios temores —perfectamente justifica-

dos— de que la marea popular pueda arrastrarla demasiado lejos. Su relación con el movimiento popular estará signado siempre por una contradicción insalvable, que sólo liquidará con el golpe reaccionario del Thermidor: necesita inevitablemente de las masas plebeyas para doblegar la resistencia de la nobleza e imponer su dominio en nombre de toda la sociedad. Pero en tanto, la clase propietaria, que ve abiertas las oportunidades de ascenso y enriquecimiento, teme la acción de sus aliados *sans culott*, demasiado inclinados a atentar contra el sagrado dogma liberal de la propiedad ilimitada e inviolable, lo que los transforma en enemigos más irreconciliables de la misma nobleza. Son, como los definió Mirabeau en un arranque de sinceridad, “auxiliares comprometedores”.

Se necesitaba la pluma de Barnave para expresar en toda su desnudez esa tensión que tiene tomadas por el cuello a las cumbres dirigentes, espantadas por la reacción popular que ocasiona la fuga del rey: “¿Terminaremos la revolución? ¿la volveremos a comenzar?... un paso más sería un acto funesto y culpable, un paso más en la línea de la libertad sería la destrucción de la monarquía, y en la línea de la igualdad, la destrucción de la propiedad.” Sociólogo de agudo instinto político, Barnave ve más allá del momento, sabe hacia dónde apuntan las tendencias radicales de esa multitud que trae de regreso a París a Luis XVI en calidad de prisionero.

Todo lo que a partir del asalto a la Bastilla fueron aproximaciones de

NOTAS

ideas en torno al rumbo y los límites de la revolución, la jornada insurreccional del 10 de agosto de 1792 —y sus consecuencias a corto plazo— será precisado y sometido al ensayo práctico.

La sublevación popular de agosto fue producto de una nueva conciencia de la multitud sobre sí misma y su misión revolucionaria, que partiendo de un patriotismo militante atizado por la exasperación del hambre, derivará hacia otras ideas sobre la democracia y el poder, totalmente extrañas a las concepciones de la Gironda y el Partido jacobino.

Entre la noche del 9 de agosto y la madrugada del 10, los pobres de París derrumbaron para siempre una obra de siglos: el estado monárquico absolutista. Otra época histórica se abre a partir de una ruptura tan profunda como nadie la previó. Los sueños más atrevidos parecen a punto de tomar el poder.

Libertad ¿Igualdad?

Un detalle verdaderamente sutil descubre cómo, a raíz del levantamiento de agosto, se precisaron dos interpretaciones divergentes que van al fondo de la disputa acerca de las posibilidades de la revolución:

El gobierno republicano que toma el poder, la convención, fecha sus actas de este modo: “Año IV de la libertad, I de la República.” Paralelamente, el gobierno municipal de París, fuertemente influido por el movimiento popular,

fecha las suyas de esta otra forma: “Año IV de la libertad, I de la igualdad.”

El cenit de la revolución estará cruzado por esta diferencia que marca programa y caminos opuestos. Las ideas de los protagonistas que llevarán la revolución a su punto más alto, se anuncian sin ambigüedades desde el momento de la insurrección.

La noche del 9 de agosto una comisión electa por las secciones parisinas se presenta ante el gobierno municipal, la comuna, a informarle que el pueblo ha decidido sublevarse y necesita organizar una dirección. Acto seguido se declara comuna insurreccional, desplazando a la comuna legal y asumiendo los poderes de ésta. No es difícil adivinar en esta acción la influencia de los agitadores *enragés*, que se mueven como peces en el agua.

Este levantamiento se organizó y ejecutó desde abajo, a niveles donde ni los más prestigiados caudillos jacobinos tuvieron algo que hacer. No existe ningún testimonio de que alguien haya visto a Marat o Robespierre en esa noche histórica. ¿Qué principios enarbolaba y en dónde se apoyaba ese gran ascenso popular que en el año II querrá implantar la República de la igualdad?

Con el exclusivo fin de elegir representantes a la asamblea de estados generales, cuya apertura debía tener lugar el primero de mayo de 1789, París fue dividido en 60 distritos electorales (los “pasivos”, esto es, los no propietarios, sólo podían nombrar electores; éstos eran los “activos”, gente que tenía rentas, de entre quienes se elegían, y sólo entre iguales, los diputados

NOTAS

del Tercer Estado), que debían disolverse una vez terminada la elección. Sin embargo, las asambleas continuaron reuniéndose, y al calor de la agitación, de forma por demás audaz, comenzaron a atribuirse funciones que legalmente correspondían a las instancias del aparato administrativo gubernamental. A la organización de los distritos se debió el armamento y la ejecución del asalto a la Bastilla.

Hacia mediados de 1790 la fuerza del Tercer Estado era ya una realidad incuestionable. La asamblea nacional configura un auténtico poder paralelo. Consciente de que ha iniciado una carrera ascendente, la burguesía quiere manos libres; su vocación de poder no es compatible con esa iniciativa popular de autoorganización que, después de todo, se desarrolla al margen de su voluntad de control. Con el fin de neutralizarla, la asamblea nacional entre mayo y junio de 1790 vota una ley municipal que, disolviendo los distritos, crea una nueva subdivisión de París en 48 secciones. La creatividad popular, acrecentada con la carga de la experiencia, acepta el decreto, pero traslada a las secciones las funciones que antes ejercían los desaparecidos distritos, y en adelante actuarán como organismos del gobierno municipal, coordinadas en la comuna mediante una especie de centro de correspondencia.

A partir de ahí se habrá de entablar una batalla permanente entre el poder estatal y las secciones; aquél empeñado en controlar y someter, y éstas en actuar como organismos autónomos, donde los *sans culott* discuten y votan

sin intermediaciones. Como lo señalamos, serían las secciones las únicas protagonistas del levantamiento de agosto.

Si después de junio de 1789 se creó una dualidad de poderes entre la monarquía y la asamblea nacional, luego de agosto del 92 esa misma dualidad se instalará entre el gobierno de la convención y las secciones agrupadas en comuna. Una experiencia inédita de autogobierno, fundado en la democracia directa y el control riguroso de los dirigentes seccionales, se confrontará con un proyecto estatal centralizado. Tras estas diferencias se mueven fuerzas sociales muy concretas.

Las jornadas del año IV echaron por tierra todas las barreras legales con que el antiguo régimen mantuvo a las masas populares al margen de toda actividad política, y que la burguesía conservó de buen grado para hacer las cosas a su manera, sin la participación de sus auxiliares comprometedores.

Se anuló la distinción entre ciudadanos pasivos y activos. La guardia nacional se abrió al ingreso de los plebeyos, y aun cuando el gobierno convencionalista fue todavía electo a dos niveles, se aceptó como principio el sufragio universal.

Por derecho y méritos propios, ganados en el campo de batalla, los *sans culott* ingresan masivamente a la política con una visión que concibe a ésta no como una colección de ideas abstractas, sino como un medio práctico para realizar los más altos fines de la revolución que, en su idea, son eminentemente sociales. Querrán pues, que la democracia sea realmente igualdad.

NOTAS

Y es que cuando las multitudes deciden tomar por propia cuenta la solución de sus problemas, al formular las aspiraciones de lo que deben cambiar, tienden siempre a una interpretación literal. Para la masa, a diferencia de las reglas de la política como profesión o negocio, no existe contradicción entre las palabras y los actos.

En la cúspide del poder los dirigentes de la convención hablan a nombre del pueblo y juran que la voluntad de éste ha encarnado en el flamante estado republicano. La democracia sólo les es imaginable — literalmente también — a través del estado y el centralismo; sólo en ese marco se les revela como una realidad aceptable.

Robespierre y el Partido jacobino, lo mismo que la Gironda, asomados a un momento de relativo desconcierto, admiten estar ante una experiencia inédita, para la cual no ofrecen respuesta los ejemplos de la República Romana o de las revoluciones inglesa y norteamericana. Pero sí tienen muy claro lo que la democracia no debe ser y los límites que no debe traspasar en un proyecto de poder que, para existir como realidad estable, necesita someter al orden la actividad de las secciones.

Dice Robespierre en un discurso de febrero del 94, **“la democracia no es un estado en que el pueblo — constantemente reunido — regula por sí mismo los asuntos públicos y todavía menos es un estado en el que cien mil fracciones del pueblo, con medidas aisladas, precipitadas y contradictorias, deciden la suerte de la sociedad entera.... La democracia es un estado en que el**

pueblo soberano, guiado por leyes que son el fruto de su obra, lleva a cabo por sí mismo todo lo que está en sus manos hacer y **por medio de sus delegados todo aquello que no puede hacer por sí mismo**” (subrayados nuestros).

La idea de los *sans culott* es completamente distinta. En noviembre del 92 la Sección de la Cité, emite una proclama en la cual, de pronto, suelta un juicio sin concesiones: “La soberanía popular es imprescriptible, inalienable e indelegable.”

Más adelante, en agosto del 93, Leclerc, uno de los más destacados dirigentes *enragés*, aprovecha la tribuna del *Ami de peuple* para precisar — parafraseando a Rousseau — cómo se entiende la democracia en las secciones y cómo la entiende él mismo: “Un pueblo representado no es libre.... no prodigues este epíteto de representantes, tus magistrados, cualquiera que sean, no son otra cosa que tus mandatarios.”

Seguramente que a los tribunos y funcionarios de la convención no les haría mucha gracia el recibir documentos enviados por los *sans culott*, donde éstos firmaban al final: “tu igual en derecho”.

1793: La revolución ha llegado a su punto más alto. Los plebeyos hablan de una República popular y comienzan a conducirse como si ésta ya fuese una realidad. La convención emite decretos, lanza furibundas condenas a la anarquía y exige disciplina. No tiene los medios para imponerla, pero pretende gobernar como si realmente existiese un estado fuerte.

NOTAS

Tras la caída del absolutismo, el calendario de la revolución — otra de sus innovaciones — marca a 1793 como el año II, que unos quieren sea solamente el de la República y otros, el de la Igualdad.

Entre ambas concepciones no cabe más que la confrontación, y ésta se desarrollará como causa y efecto al mismo tiempo de un grave cisma en las filas de la burguesía. Girondinos y jacobinos chocarán a muerte por diferencias en torno al curso que ha tomado la revolución, que no son sino diferencias sobre cómo frenar al desbordado movimiento popular.

El hecho de dirigir el movimiento revolucionario y compartir, en lo general, una misma idea acerca del poder y la revolución, los afirma como élite del liderazgo, pero no los hace idénticos. Lo que verdaderamente los diferencia, es el lugar donde cada uno tiene colocado el bolsillo.

Los girondinos preferentemente representan los intereses de la burguesía manufacturera y comerciante de los puertos, donde también se alinean los grandes plantadores esclavistas de las colonias americanas. En conjunto integran una corriente que busca transformarse en una gran potencia del mercado mundial, para lo cual les es imprescindible liquidar un añejo conflicto marítimo comercial con Inglaterra. Por eso los girondinos son entusiastas partidarios de la guerra, y a veces hacen gala de un nacionalismo exaltado.

Por otra parte, los jacobinos son más bien expresión de los nuevos ricos

que han amasado respetables fortunas comprando bienes nacionalizados que fueron de la nobleza emigrada, pagándolos con asignados, papel moneda en veloz depreciación. Además, son éstos quienes por encima de los acaudalados girondinos, obtienen los más importantes contratos del estado para abastecimiento del equipo militar.

La fortuna le había sonreído a la Gironda. Durante ese período de inestable transición, que va del asalto de la Bastilla hasta las jornadas de agosto, sus exportaciones aumentaron y se benefició con la inflación provocada por la incontrolable emisión de asignados para financiar la guerra y los gastos del aparato estatal. Todo parecía marchar más o menos bien, hasta que la insurrección popular de agosto del 92 coincidió con el agotamiento de la bonanza, tan fugaz como artificial, y las utilidades comenzaron a descender al mismo tiempo que la disciplina y el respeto a las propiedades.

Es demostrable que la guerra, al prolongarse, incidió directamente sobre la revolución, acentuando su radicalismo. Nadie mejor que la Gironda comprendió esta relación. Eso ya no era negocio, y comenzó a clamar en voz alta por el retorno del orden y la disciplina necesarios para la reactivación de sus tasas de ganancia; pero el signo del año II era justamente el opuesto. Con ganancias prácticamente en cero, se negaba a que los enormes gastos de una guerra ya no deseada recayeran sobre los poseedores. Alguien debía pagar la cuenta, y quiénes sino los *sans culott*. Harta de revolu-

NOTAS

ciones, la Gironda se decidió por la línea dura: ninguna concesión a las masas.

La pieza maestra de la política económica de la convención, fue la venta de bienes nacionales. Quienes se beneficiaron con éstos, — en la compra y la especulación — no podían considerarlos como presa segura hasta no ganarle la guerra al enemigo exterior, aliado a la nobleza expropiada, y para eso necesitaban a las masas populares de su lado.

Este sector — identificado con el partido jacobino — entendió las concesiones como sacrificios inevitables para garantizar lo medular de sus intereses, amenazados por la reacción. Éste es el fondo real que animaba la sentencia de Saintandre y Lacoste: “Es absolutamente necesario que permitáis vivir al pueblo, si queréis que os ayude a consumir la revolución”. En sus “Notas históricas de la convención”, Baudot es más que explícito: “Solamente las masas podían rechazar las hordas extranjeras. Por consiguiente, había que sublevarlas e interesarlas por el éxito. La burguesía es pacífica por naturaleza y por lo demás, poco numerosa para movimientos de esa envergadura.” Luis XVI había sido guillotinado en enero del 93. Este hecho, de incalculables consecuencias por sus implicaciones simbólicas y materiales, marcó el punto de no retorno. Imposible el retroceso, quedaba solamente avanzar. La fracción jacobina lo asumió así y con esa lógica abordó el enfrentamiento con la Gironda. Para deshacerse de ésta, no existía más que

un medio: la fuerza plebeya, que sólo resultaría efectiva a través de una alianza donde explícitamente se contemplara dejar vivir al pueblo, como dirían Saintandre y Lacoste.

Se necesitaba tener mucha audacia para ejecutar este golpe. Robespierre y los jacobinos demostraron poseerla, tanto como la firme convicción de que éstas eran medidas excepcionales y no un sistema de hacer política.

Los límites de la audacia jacobina se encontraban en su propio programa: Como revolucionarios fueron capaces de bajarle la cabeza a un rey, pero como propietarios por encima de todo valoraban el orden y la disciplina. No eran ningunos ingenuos quienes sopesaron fríamente los riesgos de hacer intervenir a los *sans culott* en una disputa entre familias, logrando canalizar y controlar el levantamiento popular del 31 de mayo de 1793, que derribó del poder al partido girondino.

Como en agosto de 1792, las secciones eligieron un comité insurreccional que debía desplazar a la comuna legal y tomar la dirección del levantamiento. Los jacobinos habían aprendido demasiado bien la lección del 92 como para dejarles las manos libres a las secciones influidas por los *enragés*. Dobsen, un agente de los jacobinos, consiguió hacerse elegir como el décimo miembro del comité insurreccional, y mediante una hábil maniobra logró que este comité, junto con la comuna y los comisarios oficiales de la entidad departamental donde se encuadraba París, formaran un comité

NOTAS

central revolucionario con el que la burocracia neutralizó la energía plebeya. Los *enragés* sufrieron un duro golpe y su estrella comenzó a declinar. Robespierre no olvidaría esta valiosísima experiencia; había encontrado la vía para desmontar otro poder: el de los *sans culott*.

Los jacobinos emergen de la contienda del 31 de mayo como vencedores, pero no como dominadores absolutos de la escena. Junto a ellos están las masas populares, conscientes de su protagonismo y convencidas de que ha caído el último obstáculo que impedía la proclamación de la república popular, o social, como otros comenzaron a llamarla. Del hambre brotarán ahora sueños y esperanzas.

En uno de sus más famosos discursos pronunciados en 1792, Robespierre había afirmado que el primer derecho al que deben subordinarse los demás, es el de la existencia. En el París del 93 ese derecho tiene un nombre muy concreto: pan.

En el fondo de todas las agitaciones y levantamientos que marcan el curso de la revolución, se encontrará siempre el fantasma del hambre.

Desde antes de la caída de la Gironda, el acaparamiento y la especulación se ejercían prácticamente sin freno. Las harinas no llegaban a París, y cuando entraban eran ocultadas en las bodegas del comercio especulador. El precio del pan se disparaba, y para comprar una pieza racionada y de mala calidad debía permanecerse por horas formando fila. Nada más normal que los *sans culott* dirigieran su odio contra el

comercio de mayoreo — esencialmente el de artículos de subsistencia — que aparecía a sus ojos como el causante del hambre y la miseria.

Estaban en lo cierto, pero sólo en la superficie de las leyes que rigen el mercado libre: Los *sans culott* no alcanzaban a comprender la naturaleza del fenómeno inflacionario; no encontraban la razón de porqué podían comprar menos cuanto mayor era el número y la denominación de los asignados que percibían por su trabajo. Esto explica la extrema violencia que ejercieron contra los comerciantes y que, en consecuencia, actuaran mucho más como consumidores, exigiendo una ley de tope a los precios, que como asalariados luchando por alzas en los sueldos.

La lucha por la subsistencia no deja lugar a la especulación teórica o la oratoria. En este contexto, las ideas políticas valen y sirven sólo en cuanto encuentran una traducción práctica.

Libertad, Igualdad, Democracia. Todo esto sonaba muy bien, y hasta la turba de especuladores recitaba estas palabras temblando de emoción en las ceremonias cívicas. Pero de pronto en el año II, cuando las masas exasperadas por el hambre y la pasividad de la convención las bajaron a tierra dándoles un rostro preciso, adquirieron un tono muy plebeyo.

Para los *sans culott* — cuya mayoría era analfabeta — aquellas palabras no eran los lemas que los burócratas estampaban obligadamente en la papejería oficial del estado, sino sencillamente una cuestión de control

NOTAS

social sobre la producción y distribución de los bienes de subsistencia. Esta concepción debía entrar en franca pugna con los principios de la economía liberal que inspiraban el programa jacobino.

Es comprensible entonces, que la convención interrumpiera a gritos y silbidos la intervención del *enragé* Jacques Roux, cuando éste puso el dedo en la llaga: "La libertad no es otra cosa que un fantasma inútil, cuando una clase de hombres puede reducir al hambre impunemente a la otra. La igualdad no es otra cosa que un fantasma inútil, cuando el rico, mediante el monopolio, ejerce el derecho de vida y muerte sobre sus semejantes. La República es un fantasma inútil, cuando la contrarrevolución se asienta día a día en el precio de los productos que las tres cuartas partes de los ciudadanos no pueden conseguir sin derramar lágrimas."

La democracia — agregaríamos — también es un fantasma, una farsa, cuando el representante existe gracias a que el representado sólo puede emplear su esfuerzo y tiempo en procurar la subsistencia.

A otro *enragé*, el genial Leclerc, se le ocurrió pedir a los diputados de la convención levantarse a las tres de la madrugada y formarse ante una panadería, para que experimentasen la dura vida de ese pueblo que decían representar. "Tres horas pasadas a la puerta de una panadería — les dijo — formarían más a un legislador que cuatro años de ocupar los bancos de la convención."

En el año II, conseguir el pan se tornó una cuestión de democracia directa.

En las asambleas populares — concurridas como nunca — se instituyó el sufragio por aclamación y abierto, es decir, todos los asambleístas tenían que identificarse al momento de emitir su voto y expresar el sentido de éste. En ocasiones esto se hacía sentándose o poniéndose de pie para aprobar o desaprobar. Los *sans culott* no gustaban del voto secreto en razón de una sencilla lógica: el revolucionario no debe temer expresar públicamente su opinión. Para los militantes de la democracia en abstracto, esta actitud debía ser condenada como intolerante, y efectivamente lo era, sólo que dirigida contra un sector muy específico: el de los especuladores y monopolistas, cuyos agentes, muy activos en algunas secciones, se dedicaban a sabotear — a veces mediante la compra de votos — las iniciativas contra la ocultación de harinas y el monopolio. Al final, el voto abierto resultó muy eficaz para deshacerse de ellos.

Toda la vitalidad de la revolución brotó de estas asambleas, donde se organizó la requisita de víveres y la batida contra los especuladores. Las secciones pusieron en vigor lo que hoy llamaríamos un seguro social, que se hacía cargo de las viudas y huérfanos de los combatientes, y aún de los desempleados. Llegaron incluso a organizar cooperativas de vestuario militar para dar ocupación a los sin trabajo, tratando de competir con los grandes contratistas del ramo, de los que no

NOTAS

pocos se alineaban con el partido de Robespierre.

Los jacobinos, ni duda cabe, ejercían un poder real que, sin embargo, de julio a diciembre de 1793, fue claramente contrapesado por el de las secciones y sociedades populares. Su fuerza y acción determinaron la promulgación de la ley de precio máximo en los granos, la del máximo general y la abolición definitiva de los derechos feudales sin indemnización, instaurando en suma una economía dirigida.

Durante un breve período la República igualitaria sería una realidad que la historia escrita marginó hasta oscurecerla, para centrarse en las memorias del terror decretado por la dictadura del comité de salud pública. Sería un error confundir o identificar estos dos fenómenos paralelos, pero muy diferentes: El terrorismo robespierista fue una medida puramente de estado, fundada en intereses del poder del estado, que terminaría guillotinando a la democracia popular del año II.

Aquella inestable situación, jalónada por la existencia de dos poderes antagónicos, no podía sostenerse por más tiempo. El desenlace se produjo al estallar las contradicciones internas que arrastraban cada uno de los protagonistas.

El primer atentado al sagrado derecho de propiedad — el calificativo “sagrado” lo empleaba la doctrina liberal, no la plebe — lo cometió la burguesía al expropiar y adjudicarse los bienes de la nobleza emigrada. No quería predicar con el ejemplo y calificó su acción como patriotismo, y los actos

de la plebe que ahora amenazaban sus propiedades, como bandidaje anarquista. Lo pasado fue virtud; lo presente un atentado a los derechos naturales.

Empujado por la marea popular en ascenso y por su misma audacia, Robespierre traspasó los límites de su programa burgués al proponer para la constitución de 1793, unas definiciones del derecho de propiedad que parecieron escandalosas y violatorias a la burguesía.

“El derecho de propiedad está limitado, como cualquier otro, por la obligación de respetar los derechos de los demás. El derecho de propiedad no puede perjudicar ni la seguridad, ni la libertad, ni la existencia ni la propiedad de nuestros semejantes. Cualquier posesión o comercio que viole este principio es ilícito e inmoral.”

Bien entendido, esto significa condicionar y limitar un derecho que la doctrina del *Laissez faire* considera ilimitado e incondicional. Y, más aún, como dijera el socialista Jaurés analizando el texto, era hacer de la propiedad un sujeto sospechoso que puede “justificar jurídicamente las enormes expropiaciones que las alteraciones de la vida económica pueden hacer necesarias después”.

Esto fue justamente lo que hicieron los *sans culott*, aunque para ello no necesitaron de constituciones. El 2 de septiembre del 93, la sección *Jardin des plantes*, envió una resolución a la convención, exigiéndole fijar el máximo de fortunas. ¿Qué querían decir con esto? Definir el límite de “lo má-

NOTAS

ximo que un individuo puede poseer”, “que nadie tenga más de un taller y una tienda”. Esta medida haría “desaparecer poco a poco la desigualdad demasiado grande de las fortunas y crecer el número de propietarios”.

Naturalmente la moción no fue aprobada. Lo interesante es que esa petición expresa la más sentida aspiración de los *sans culott*, y el nudo de su contradicción como grupo social.

Yerran quienes ven en el movimiento *sans culott*, un antecedente del socialismo marxista: esta masa de artesanos y comerciantes de menudeo no luchaba para liquidar la propiedad privada, sino para generalizarla. Sin embargo, esa democratización radical de la propiedad con la que soñaban, los oponía irremisiblemente con el capitalismo de la época, esencialmente mercantil y monopolístico.

La paradoja es que la revolución hecha por ellos, no podía marchar en lo económico a otra realidad que la concentración de los medios de producción, es decir, al pleno capitalismo industrial, que terminaría transformándolos en masa proletaria.

La trágica ironía fue que estos pequeños productores que se formaron y crecieron a la sombra del antiguo régimen, nunca imaginaron que acabado éste, el tiempo también había terminado para ellos. El ángel de la historia les había encomendado una misión: destruir el viejo orden feudal aristocrático, y una vez cumplida, ese mismo ángel se volvió contra ellos.

El año III de la igualdad ya no llegaría. Durante cinco años la burguesía

impacientada preguntó hasta cuándo terminaría la revolución. Ahora llegaba el momento de pasar a señalar culpables. Saint' André, el jacobino que había pedido “dejar vivir al pueblo” para consumar la revolución, encontró que el enemigo estaba justamente ahí: “Nuestros mayores enemigos no están fuera; están a nuestra vista, en medio de nosotros; quieren llevar más lejos que nosotros las medidas revolucionarias.”

La última solución que restaba para hacer saltar este nudo era encontrar la forma práctica de despejar una u otra de las incógnitas que Barnave había planteado en 1791 tras la fuga del rey: “¿Terminaremos la revolución? ¿la volveremos a comenzar?” Los jacobinos, adelantándose, hallaron respuesta afirmativa a la primera interrogante. Su genio encontró la forma de terminar la revolución, y de liquidarse ellos mismos: estatizarla.

Cuando las facciones ya habían caído, la ofensiva jacobina se enfiló contra las sociedades seccionarias y los clubes revolucionarios, acusándolos de federalismo. El cargo era que resultaban incompatibles con el poder centralizado. Confesadamente, los jacobinos buscaban forjar de modo autoritario y burocrático una unidad de ideas y acción en torno a su partido.

Mediante un decreto, la convención facultó al poder para destituir a los delegados de las secciones en el consejo general de la comuna, considerándolos en lo sucesivo como funcionarios públicos.

Los representantes ya no serían más los “mandatarios” elegibles y des-

NOTAS

tituibles a voluntad de las asambleas soberanas, sino simples burócratas asalariados por el poder y adictos a éste. La comuna terminó como un engranaje más de la maquinaria estatal. En toda Francia se prohibió a las comunas, así como a sus sociedades populares y comités revolucionarios, mantener relaciones directas entre sí. Los *sans culott* ya no lograron reconocerse en esos organismos enteramente burocratizados.

Robespierre había golpeado a izquierda y derecha. Hizo pasar por la guillotina a los *enragés*, a Danton, a los cordeleros y a los Hebertistas, y cuando llegó el golpe del Thermidor se encontró colgado del vacío, sin fuerza para resistir. Desmoralizados y desorganizados, los *sans culott* vieron impotentes como Robespierre era arrastrado a la guillotina. El engendro burocrático que había creado para poner freno a la revolución terminó devorándolo. La burguesía pudo al fin respirar tranquila y afirmar, con la seguridad del triunfo: La nación somos los propietarios.

El año de 1795 será realmente el año I de la desigualdad constitucionalmente sancionada. Boissy d'Anglas redactó el discurso preliminar al proyecto de constitución donde se declararon proscritos todos los sueños.

“Finalmente debéis garantizar la propiedad del rico... la igualdad civil es todo lo que el hombre razonable puede exigir... un país gobernado por los propietarios tiene orden social; aquel en que gobiernan los no propietarios se halla en estado salvaje.... Si a los hombres sin propiedad otorgáis

derechos políticos sin reservas.... establecerán o dejarán establecer funestas limitaciones al comercio y a la industria, porque no temerán ni habrán previsto sus deplorables consecuencias.”

El espíritu de éste puede escucharse hoy como un eco, en el discurso del neoliberalismo.